

***Soberanía y libre comercio:
Reflexiones sobre la experiencia de Canadá
JULIÁN CASTRO REA***

Los gobiernos de los tres países signatarios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), que entró en vigor desde el primer día del pasado año, han repetidamente insistido en que el tratado es de naturaleza exclusivamente comercial. Para ello, se basan en la definición clásica de zona de libre comercio, entendida como un acuerdo internacional mediante el cual uno o más países eliminan gradualmente los obstáculos mutuos a la libre circulación de bienes y servicios¹.

Diversos teóricos de la integración económica apuntan sin embargo que los acuerdos comerciales contribuyen a incrementar la interdependencia entre los países participantes. Todo acuerdo comercial invadirá tarde o temprano otros ámbitos de la realidad de esos países. Se produce así un efecto de desbordamiento (spillover²) hacia cuestiones económicas cada vez más complejas. A la postre, el desbordamiento produce un efecto de multiplicación político, social y cultural, fomentado por los medios de comunicación masiva y los grupos de presión cuya acción atraviesa las fronteras.

La experiencia de Canadá, socio menor del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) que lo vincula a Estados Unidos desde el inicio de 1989, proporciona mayor evidencia de esta tendencia al desbordamiento. A la vez, permite estimular nuestra visión sobre los posibles efectos que el TLC tendrá sobre México. En una reflexión más amplia, este ensayo subrayará los desafíos que este acuerdo comercial presenta para la soberanía de México.

La campaña por el .ALC

Es posible distinguir al menos cuatro asuntos políticos internos canadienses que fueron afectados por el ALC bilateral, a saber:

1. Las elecciones federales de 1988;
2. La correlación en términos políticos que se hace entre el ALC, el desempeño de la economía y la legitimidad del gobierno;
3. El proceso constitucional, en particular los movimientos nacionalistas en Quebec y regionalismo en el Oeste, y
4. La aparición de nuevos actores políticos transnacionales.

Estos asuntos, en la medida en que se producen en tiempos muy cercanos o simultáneos, guardan una estrecha correlación entre sí y se influyen mutuamente. Analicémoslos más de cerca.

Aún antes de entrar en vigor, el ALC tuvo repercusiones políticas internas para Canadá. La negociación de este acuerdo concluyó en diciembre de 1987, su ratificación consumió todo el año de 1988. Esta larga espera favoreció la polarización

de las posiciones que se habían delineado desde que, en el verano de 1985, el gobierno del Partido Progresista Conservador (PPC, llamado también Tory) dirigido por el primer ministro Brian Mulroney anunció su intención de negociar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos³.

Las opiniones de los canadienses se dividían alrededor de dos campos bien definidos:

a) El de los defensores de dicho acuerdo: el gobierno conservador y destacados grupos de negocios⁴. Apoyados en una visión neoliberal de la economía, los defensores del tratado lo presentan como la mejor estrategia para la recuperación y la expansión económicas, gracias al potencial de comercio e inversión que la eliminación de barreras a la libre circulación abre a las empresas canadienses.

b) Quienes temían los efectos nocivos de una alianza estrecha con Estados Unidos, a la cabeza de los cuales se encontraban los sindicatos y numerosas organizaciones no gubernamentales⁵. Su visión sobre el tratado era opuesta: la gran asimetría que existe entre las economías canadiense y estadounidense, la eliminación de barreras comerciales no puede sino disminuir la capacidad de Canadá para elaborar una política económica autónoma y aumentar la dependencia, con grandes costos para el país nórdico: emigración de inversiones, desempleo, deterioro de la balanza comercial, disminución de los niveles de protección social, etcétera.

El tema central de las elecciones federales canadienses de noviembre de 1988 fue así el AI-C. Los partidos políticos contendientes, para mencionar sólo a los tres con representación en el Parlamento, se alinearon en los dos campos arriba descritos. El PPC en el gobierno defendía por supuesto el acuerdo, presentándolo como el camino de Canadá hacia el futuro.

En cambio, el PLC y el Partido Neodemócrata (PND) se oponían al tratado. aquél sobre todo por consideraciones electorales tácticas, éste por coherencia con su base sindical y su ideología socialdemócrata⁶. Bajo la presión de una opinión pública cada vez más escéptica⁷, las elecciones sirvieron para determinar si el gobierno del PPC tenía o no la legitimidad para aplicar lo negociado con Estados Unidos. Los resultados fueron los siguientes:

Los resultados confirmaron la oposición de la mayoría absoluta de los canadienses al arreglo comercial, pues 52.3 por ciento de los ciudadanos votaron por partidos que prometían expresamente en sus plataformas electorales la anulación del acuerdo. Sin embargo, el sistema electoral, de mayoría simple y a una sola vuelta empleado en Canadá, y el sistema parlamentario en el que la mayoría legislativa forma el ejecutivo llevaron a los conservadores al poder por segunda vez consecutiva. El nuevo gobierno Tory no tardó en ratificar el tratado al mes siguiente. De esta manera, pudo aplicarse desde el 1° de enero de 1989 un tratado comercial impopular desde el principio, que hubiera sido derrotado en referéndum nacional expreso sobre el tema.

La pérdida de legitimidad del gobierno conservador

Desde 1990, Canadá atraviesa por una profunda recesión económica que ha significado no sólo la desaceleración del aparato productivo sino también la pérdida de empleos, el cierre de compañías, la fuga de inversiones, y el incremento concomitante de la carga fiscal para sufragar las prestaciones sociales a los desempleados y ayudar a las empresas en dificultades⁸

Los grupos que se opusieron a la ratificación del ALC en su momento consideran que el acuerdo produjo la recesión o, al menos, contribuyó a desatarla. Líderes nacionalistas como Mel Hurtig o Maude Barlow⁹ acusaron al gobierno conservador de haber pactado en secreto con Estados Unidos, como concesión en la negociación del ALC, mantener sobrevaluado el dólar canadiense respecto al estadounidense desde la entrada en vigor del acuerdo; como un medio de reducir las ventajas competitivas de las empresas canadienses en el espacio norteamericano liberalizado.¹⁰

Aunque es un tema controvertido por la dificultad de demostrar de manera inequívoca la relación causal acuerdo-recesión, esta interpretación ha ganado terreno en el seno de la opinión pública canadiense. La oposición aumentó aún más con el acuerdo comercial trilateral.¹¹

El rechazo a la política comercial del gobierno conservador, pieza clave de su política económica, es un elemento clave en la caída de la popularidad del gobierno de Mulroney¹². Con 43 por ciento del favor popular en las elecciones de 1988, el apoyo a Mulroney cayó a 11 por ciento a principios de 1993, la tasa de popularidad más baja de un primer ministro en la historia canadiense. Su renuncia en febrero de 1993, y su sustitución tres meses más tarde por Kim Campbell, apenas si cambió el rechazo de los ciudadanos del PPC. En las elecciones federales de octubre de ese año, el PPC logró 16 por ciento del voto popular diseminado en todo el país, pero hizo elegir a solamente dos diputados, por lo que su representación parlamentaria cayó a menos de 1 por ciento.

Esta catástrofe electoral para el más antiguo partido político de Canadá no se explica solamente por la insatisfacción frente al bajo desempeño de la economía canadiense o por la deslegitimización producto del rechazo al acuerdo de libre comercio. Ambos elementos son sin embargo factores de peso para explicar los resultados electorales de 1993.

El proceso constitucional y los regionalismos

Otro elemento a considerar dentro de las causas de la derrota del PPC es el fracaso de las dos grandes iniciativas de reforma constitucional del gobierno de Mulroney: los acuerdos del Lago Meech (1987-1990) y de Charlottetown (1992). El primero fracasó al no lograr el apoyo de todos los gobiernos provinciales, el segundo por su rechazo en referéndum nacional. Un factor primordial para explicar estos fracasos es el fortalecimiento de los movimientos regionalistas.

A1 parecer, la falta de consenso para mantener un Canadá unido hizo más creíbles las opciones provincialistas como alternativas para resolver los problemas nacionales. Estas apuestan al libre comercio como instrumento para disminuir su dependencia del resto de la federación canadiense. Sin desearlo, el gobierno conservador preparó el terreno para el florecimiento del movimiento centrífugo, al utilizar el ALC como un instrumento para disminuir las tensiones regionales.¹³

Dos son los movimientos regionalistas más notorios: el llamado nacionalismo quebequense y el reformismo del Oeste. Ambos se nutren del sentimiento de alineación de las regiones respecto del gobierno federal, que sienten que Ottawa no está atendiendo a sus verdaderas necesidades y demandas. Los fracasos constitucionales fueron favorecidos y fomentaron a su vez dichos movimientos, a tal punto que éstos actualmente alcanzan su punto más alto en la historia canadiense reciente. En efecto, los representantes más conspicuos de ambos movimientos a nivel federal, el Bloque Quebequense (BQ) y el Partido Reformista (PR), lograron colocarse en las elecciones de 1993 como la segunda y tercera fuerzas parlamentarias, con 52 y 54 diputados respectivamente sobre un total de 295. Florecen respectivamente en Quebec y en Alberta, los dos pilares para los triunfos del PPC en 1984 y 1988.

El PR recoge la oposición que la provincia de Alberta opuso a la aplicación de una política energética nacional. A principios de los ochenta, el gobierno de esta provincia se alió a las empresas petroleras, principalmente de origen estadounidense, para combatir el National Energy Program (NEP), que buscaba orientar la producción y distribución energética atendiendo ante todo a las necesidades de Canadá. El NEP limitaba así la capacidad de las empresas para ajustarse rápidamente a los cambios en el mercado energético¹⁴. El ALC consolidó este ataque de los intereses regionales de Alberta, primera provincia productora de petróleo, sobre las prioridades nacionales, al plasmar el principio de que el gobierno canadiense no podrá establecer límite alguno a las exportaciones de las compañías petroleras aún como medida de contingencia en caso de escasez del hidrocarburo. Los reformistas creen sin embargo que el libre comercio es una opción necesaria para la economía nacional, aunque desean que se apliquen mecanismos de ajuste (reducción de las tasas de interés, interprovinciales, programas de transición para la mano de obra, etcétera) que permitan que el ALC favorezca más a Canadá.¹⁵

En el debate nacional alrededor del libre comercio, Québec fue la provincia que defendió de manera más decidida el acuerdo comercial. Las diversas tendencias autonomistas, llamadas en Québec "nacionalistas", desde las que buscan la ampliación del margen de maniobra de la provincia respecto a Ottawa hasta quienes desean su independencia pura y simple, coinciden en favorecer la liberación de los intercambios con Estados Unidos y México.

Por una parte, este apoyo se debe a que el mercado estadounidense es más importante para las exportaciones quebequenses que el mercado del resto de Canadá. Por otro lado, el gobierno de Québec practica desde hace treinta años una diplomacia paralela a la del gobierno federal, con el objeto de afirmar su diferencia dentro de Canadá

mediante el reconocimiento internacional ¹⁶. El TLC forma parte de esta estrategia, pero hay otros motivos por los que los nacionalistas lo apoyan, a saber:

a) El acuerdo significa la disminución del poder del gobierno federal, ya que la liberalización comercial da más capacidad de decisión a las empresas sobre asuntos de política económica. Como resultado de un proceso iniciado en los años sesenta, las empresas de capital quebequense controlan actualmente la mayor parte de los sectores manufacturero y financiero de la provincia¹⁷. Además, este retiro voluntario del gobierno federal favorece a los gobiernos subnacionales, entre ellos los provinciales.

b) La participación de México en el arreglo comercial le permite a Québec afirmar la heterogeneidad de América del Norte. Québec no será la única cultura discordante rodeada de un océano anglosajón, los francoparlantes podrán exigir respeto a su idioma al igual que los hispanoparlantes. Además, gracias a la barrera lingüística, los nacionalistas quebequenses sienten que su provincia es inmune a la asimilación cultural por parte de Estados Unidos, temor que existe en el resto de Canadá y que fomentó la oposición al libre comercio.

c) La liberación comercial disminuye aún más la dependencia económica de Québec respecto al resto de Canadá, pues el acuerdo institucionaliza las relaciones económicas en Norteamérica. Así, el TLC puede amortiguar los efectos nocivos para Québec de una eventual secesión, al reducir las posibilidades de represalia por parte del resto de Canadá o de Estados Unidos.

El TLC es pues también un instrumento estratégico al alcance de los intereses regionales en sus pugnas contra el gobierno nacional, lo cual debilita al Estado canadiense.

Nuevos actores políticos transnacionales

La intensificación de las relaciones entre Estados Unidos y Canadá resultante del tratado comercial favoreció el despliegue de actores políticos no gubernamentales que tratan de ejercer influencia a través de la frontera. El ALC fomentó de esta manera el ejercicio de la "diplomacia civil"¹⁸, o presión de grupos de un país sobre el gobierno de otro para el logro de objetivos políticos.

Así, una serie de actores transnacionales ejercen vigilancia sobre la manera en que el gobierno canadiense maneja sus asuntos internos. Estos nuevos actores son el resultado de la concertación de alianzas entre grupos canadienses y sus contrapartes en Estados Unidos y, más tarde, en México.

El primer tema sobre el que los actores transnacionales se pronunciaron es, por supuesto, el AI-C. A las alianzas entre empresas y gobiernos partidarios del acuerdo, que contribuyeron a su aprobación con cabildeo y propaganda, respondió la acción concertada de los grupos opositores al acuerdo. Estos grupos incluyen sindicatos,

Iglesias, estudiantes y profesores, intelectuales, agricultores, indígenas, asociaciones culturales, grupos de mujeres y otras organizaciones sociales no gubernamentales.

La oposición al acuerdo bilateral con Estados Unidos se agrupó en la coalición llamada Pro-Canadá Network ¹⁹ y. Cuando el ALC fue aprobado y puesto en vigor en 1989, en vez de disolverse la coalición opositora se reorganizó para mantener la batalla contra el acuerdo. Al año siguiente, decidió oponerse al tratado trilateral con México, bajo el nombre de Action Canadá Network (ACN), para no herir susceptibilidades de los miembros quebequeses ²⁰. Esta red desarrolló contactos con los grupos opositores al acuerdo en Estados Unidos y en México, y nutrió a los grupos de presión que compartían sus objetivos. El ACN tiene estrechas relaciones con el Partido Democrático Revolucionario (PRD) y su representación parlamentaria, con quienes comparte el objetivo básico de poner fin al acuerdo con Estados Unidos y México.

La diplomacia civil no se ejerce solamente en torno al Al-C. La oposición al tratado fomentó la vigilancia de los grupos de presión de Estados Unidos sobre la manera en que Canadá maneja sus asuntos internos. Podemos mencionar al menos tres casos en los que Canadá se vio presionado por grupos estadounidenses, aliados con intereses canadienses coincidentes.

En el verano de 1990, grupos indígenas estadounidenses colaboraron activamente con los mohicanos de la reserva de Kanasatake, Québec, para defenderse de los reclamos territoriales del municipio vecino de Oka. La intransigencia de las partes en conflicto llevó a un enfrentamiento armado entre la policía provincial y el cuerpo de seguridad de la reserva, en el cual murió un policía. Las fuerzas armadas canadienses fueron llamadas a intervenir, los indígenas sostuvieron un largo sitio mientras se llegaba a una solución negociada. A lo largo de todo el conflicto, los mohicanos fueron apoyados por sectores de la prensa y la opinión pública de Estados Unidos, que cuestionaban el compromiso del gobierno canadiense con el respeto de los derechos humanos y con los tratados coloniales indígenas.

El segundo ejemplo tuvo lugar al año siguiente. En 1991, Greenpeace Canadá lanzó una campaña contra los proyectos hidroeléctricos que la compañía pública provincial Hydro-Québec realizaba en Grande-Baleine, en el norte de esa provincia. El grupo ecologista se alió con los grupos indígenas cris, abenakis e inuits cuyos territorios resultarían afectados por las presas; y con grupos de presión de Estados Unidos: defensores del medio ambiente, la prensa (en particular The New York Times) y otras organizaciones. El gobierno de Québec contraatacó, lanzando una costosa campaña de relaciones públicas para revertir el juicio negativo de la opinión pública estadounidense. La campaña contra los proyectos tuvo sin embargo éxito, pues logró que en 1992 el estado de Nueva York cancelara un contrato de compra de electricidad a Hydro-Québec por 17 mil millones de dólares canadienses. Esta cancelación puso en entredicho la pertinencia misma de los proyectos, orientados básicamente a la exportación de energía eléctrica hacia Nueva Inglaterra, y retrasó su conclusión a un futuro aún no definido.

El último ejemplo es similar al recién expuesto, sus actores probablemente se inspiraron en él dado el éxito que obtuvo. Grupos economistas de Colombia Británica apelaron a la opinión pública estadounidense para detener la tala que juzgan inmoderada de los bosques de la isla de Vancouver. Dos son los destinos principales de la madera allí extraída: celulosa para papel, y madera para construcción. Ambos productos son exportaciones canadienses de primer orden, en las que el país nórdico tiene ventajas comparativas, por lo que los sectores proteccionistas estadounidenses apoyan alegremente el boicot orquestado por los ecologistas.

Podríamos citar otros ejemplos similares en los que un problema doméstico desborda las fronteras canadienses y se vuelve un tema político norteamericano. Estos tres conflictos tuvieron diversas consecuencias, la más importante de las cuales fue aumentar el peso de los grupos indígenas en el proceso político. Este nuevo peso les permitió negociar con éxito lo que no habían logrado en el pasado: el reconocimiento por los gobiernos federal y provinciales del llamado "derecho intrínseco a la autonomía gubernamental" que, aunque aún no bien definido, implica alguna forma de participación de los grupos autóctonos en el gobierno de las regiones que han poblado históricamente. Este reconocimiento fue plasmado en el proyecto de reforma constitucional de Charlottetown. Aunque como vimos anteriormente este proyecto no fue aceptado, el reconocimiento de este derecho sienta un precedente que será difícilmente retirado.

Libre comercio y soberanía: algunas reflexiones a manera de conclusión

El primero de enero de 1994 el destino nos alcanzó: entró en vigor el controvertido TLC. Ahora más que nunca, es tiempo de reconocer que el acuerdo, negociado en términos comerciales, abre sin embargo la puerta a una mayor interdependencia de los países de América del Norte en otros ámbitos ²¹. La experiencia canadiense, que se produjo cinco años antes de la nuestra, está allí como ejemplo aleccionador de los efectos que la liberalización comercial pactada puede tener sobre la dinámica política interna de los Estados participantes.

Muy probablemente, el ALC tuvo efectos directos y rápidos en Canadá gracias a la similitud lingüística y cultural que ese país guarda con su vecino del sur. México, y como hasta cierto punto la provincia de Québec, están en ese sentido relativamente protegidos. El desafío es sin embargo real.

Los canadienses, abiertos al mundo mucho antes que México dentro de las instituciones multilaterales de la posguerra, mucho menos celosos de la soberanía como valor absoluto en las relaciones internacionales ²², comienzan a preocuparse de los desafíos que la intervención internacional presenta a los asuntos internos de su país. Un documento recientemente producido por la unidad de elaboración de políticas del ministerio canadiense de Asuntos Exteriores suena la alarma sobre los riesgos del intervencionismo ²³. Los canadienses reaccionaron igual que México frente a la Ley Torricelli (de reforzamiento del bloqueo a Cuba mediante sanciones a las empresas de cualquier parte del mundo que comercien con la isla) y, en el marco de las

negociaciones de los acuerdos paralelos al TI-C, frente al intento de Estados Unidos de aplicar sanciones económicas a violaciones de normas de protección al medio ambiente y de someter las decisiones de los tribunales nacionales en materia ambiental a una segunda instancia arbitral transnacional.²⁴

México ya está siendo sujeto a la vigilancia de los gobiernos y de las sociedades de Estados Unidos y Canadá en todos los ámbitos. Esta vigilancia está adquiriendo particular relevancia en asuntos de derechos humanos y libertades democráticas desde el momento mismo de entrada en vigor del acuerdo, con el estallido en Chiapas de la rebelión campesina contra la marginalidad y la falta de democracia. En Estados Unidos la opinión pública, acicateada por las audiencias especiales organizadas en el Congreso por los opositores al TI-C, se vio obligada a revisar la imagen del México moderno y competitivo que muchos medios masivos y la intensa campaña del gobierno mexicano habían vuelto convincente. Canadá reaccionó a su vez condenando moralmente las prácticas del gobierno y el ejército mexicanos, y juzgando el arcaísmo de los insurrectos. Un editorial canadiense habla de un "déficit democrático" y señala: "los acontecimientos de México son también de nuestro espacio común... (canadienses y estadounidenses) no pueden lavarse las manos frente a la persistencia de una situación casi feudal en un país cuyo destino compartiremos de aquí en adelante"²⁵

El intervencionismo no es sólo declarativo. Con la entrada en vigor del TLC, aumentó de manera irreversible la vulnerabilidad política de México a las acciones de ambos socios norteamericanos, ya no solamente de Estados Unidos. Ante el conflicto de Chiapas se produjeron las primeras acciones de intervencionismo canadiense, con la visita de al menos dos misiones de observadores²⁶ que exigen a su gobierno presionar al nuestro para la pronta solución de los abusos del ejército. Esta presión puede ser benéfica para la solución negociada y democrática del conflicto, aunque es una clara intervención en asuntos de competencia exclusiva de los mexicanos. En todo caso, es un hecho que el conflicto chiapaneco está erosionando el capital político externo e interno que Carlos Salinas y Luis Donaldo Colosio, candidato del partido en el poder, ganaron con la aprobación del TLC.

La oposición mexicana, en cambio, está encontrando en el exterior eco a sus reclamos. Sus esfuerzos se orientan hacia los socios norteamericanos porque, paradójicamente, dada la naturaleza particular del sistema político mexicano, la opinión pública estadounidense y canadiense son tanto o más importantes para moderar la acción del gobierno mexicano que la propia opinión de los mexicanos.

Ahora que la apertura al exterior es irreversible, que los asuntos internos del país están sometidos a juicio externo, México enfrenta el desafío de una redefinición de su soberanía. Para llegar a ella, será necesario deslindar los asuntos esenciales de los accesorios, aquéllos en los que puede aceptarse la vigilancia internacional de los que excluyen incluso la opinión extranjera. Dentro del primer conjunto pueden señalarse, a título solamente indicativo, la política comercial, expresamente comprometida con el TLC, la protección del medio ambiente, la aplicación de la legislación nacional en materia social y laboral, el respeto a los derechos humanos y políticos. Lo que debiera en cambio guardarse celosamente es la conducción de la política industrial y

monetaria, la libre disposición sobre los recursos naturales, la definición sin cortapisas de la legislación en materia social y laboral.

La puesta en práctica de una política exterior activa, propositiva y no reactiva, es también necesaria. En lugar de soportar pasivamente las consecuencias negativas de la liberalización comercial y de la mayor exposición al exterior, México debe aprovechar las ventajas de esta situación.

En efecto, la liberalización comercial favorece la interdependencia en América del Norte, es decir no solamente México se vuelve más vulnerable a la influencia de Estados Unidos sino que también este país está más descubierto frente a la influencia mexicana. Por supuesto, la relación no es de ninguna manera simétrica. El equilibrio puede sin embargo buscarse con ayuda del otro socio norteamericano que, como hemos visto, sufre desde hace cinco años en su dinámica política interna las consecuencias de la apertura comercial con la primera potencia del planeta. La concertación entre Canadá y México para defender intereses comunes en el área norteamericana puede ser la mejor estrategia para lograr ventajas sustantivas de la integración comercial en curso.²⁷

Contrariamente a lo que parece a simple vista, México y Canadá pudieran estar en una posición favorable para tener éxito, más favorable que muchos países del orbe. La compleja relación que los vecinos mantienen con Estados Unidos incrementa la interdependencia. Dicho de otra manera, la potencia requiere de la cooperación de sus vecinos para resolver numerosos asuntos que afectan a la seguridad misma de su territorio. El poder es una variable relativa, depende de las circunstancias y de la oportunidad e intensidad con que una presión es ejercida²⁸. México y Canadá están bien colocados para manipular la interdependencia a su favor, manipulación que será tanto más efectiva si se hace dentro de la lógica de la política interna estadounidense y de manera concertada.²⁹

La concertación política puede ser incluso fundamental para el logro de objetivos económicos, para sacar el mayor provecho posible del modelo económico que se ha implantado actualmente en Norteamérica. Esta fue la posición del gobierno mexicano durante la primavera de 1993, en el momento en que se negociaban los acuerdos paralelos al TLC.³⁰

La experiencia canadiense con cinco años de libre comercio es aleccionadora para México, pues puede servirnos como ejemplo de los riesgos inherentes a la apertura comercial con la potencia del norte. A la vez, es el mejor argumento para convencer a los canadienses de la necesidad de cooperar con México para amortiguar los impactos internos negativos en el espacio norteamericano en proceso de integración.

¹ Ver Jacob Viner, *The Customs Uninn Issue*, Nueva York: Carnegie Endowment for International Peace, 1950 y Ramón Tamames, *Estructura económica internacional*, Madrid: Alianza, 1988.

² El concepto fue introducido por los teóricos de la integración europea Ernst B. Haas y Leon N. Lindberg. Ver E. Haas, *The Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Forces, 1950-1957*, Stanford: Stanford University Press, 1958 y L. Lindberg, *The Political Dynamics of European Economic Integration*, Stanford: Stanford University Press, 1963.

³ Mulroney legitimó su decisión en las recomendaciones emitidas por la llamada "Comisión Macdonald", grupo de trabajo parlamentario multipartidista formado en 1982 para sugerir al gobierno alternativas para el relance económico de Canadá. Aunque las conclusiones fueron publicadas a principios de septiembre de 1985, el primer ministro ya las conocía desde principios del verano. No sólo la Comisión había sido creada por un gobierno del Partido Liberal de Canadá (PLC), el otro gran partido político canadiense entonces en la oposición, sino que Donald Macdonald, presidente de la Comisión, es un destacado liberal. El primer ministro pudo así presentar la decisión como una iniciativa bipartidista. Ver *Royal Commission on the Economic Union and Development: Proposals for Canada*, Ottawa: Department of Supplies and Services, 1985.

⁴ Principalmente el *Business Council for National Issues*, la agrupación empresarial más importante del país, que agrupa al menos a 150 grandes empresas y mantiene relaciones orgánicas con otras tres centrales empresariales. A través de su antiguo líder, el senador Thomas d'Aquino, esta organización es sin duda la más influyente en la definición de políticas públicas.

⁵ Para la composición del movimiento anti-ALC, ver más adelante en este ensayo la sección sobre los nuevos actores transnacionales.

⁶ Un recuento de la importancia del acuerdo comercial en las elecciones de 1988 puede hallarse en Doern, G. Bruce y Brian W. Tomlin, *The Free Trade Story: Faith and Fear*, Toronto: Stoddart, 1991, pp. 226-242. Esta obra contiene por cierto el mejor análisis, imparcial y documentado del origen, significado y posibles consecuencias para Canadá del acuerdo de libre comercio, en el plano de la toma de decisiones (policymaking).

⁷ Dos días antes de la elección, 41 por ciento de los canadienses se oponían al acuerdo, sólo 34 por ciento lo apoyaban. Ver Jon Hughes, *Canadians Unsupportive of Tory Trade Policies in The Callup Poll*, Toronto, 30 de agosto de 1993, p. 2.

⁸ El PIB de Canadá decreció en 0.3 por ciento en 1990, en 13 por ciento en 1991, y creció apenas 1.1 por ciento en 1992 y 2.4 por ciento hacia septiembre de 1993 (tasa actualizada). Entre enero de 1990 y octubre de 1991 quebraron 16 mil 453 empresas canadienses, cada una significa la pérdida permanente de empleos. En 1990, la tasa de desempleo era de 8.1 por ciento de la PEA, a fines de 1993 se situó en 11.2 por ciento. En términos absolutos, este porcentaje representa mil 565 millones de desempleados. Los jóvenes menores de 25 años son afectados particularmente, en junio de 1993 había 452 mil de ellos sin empleo. Los sectores en los que hubo mayor pérdida de empleos son la industria manufacturera y la construcción. Entre junio de 1989 y marzo de 1991 se perdieron en Canadá 435 mil empleos en la industria

manufacturera, lo cual representa 21.7 por ciento de la PEA en ese ramo. Datos de Statistics Canada, Royal Bank of Canada, Scotiabank, Clyde Graham *Histoires d'horreur en Le Devoir*, Montreal, 21 de diciembre de 1993 y Moody, Kim y Mary McGinn, *Unions and Free Trade: Solidarity or Carttpetition*, Detroit: Labor Notes Book, 1992, pp. 17-18.

⁹ Mel Hurtig es el fundador y líder del Partido Nacionalista de Canadá, que contendió en las pasadas elecciones de octubre de 1993. Mande Barlow es la lideresa del grupo de presión Council of Canadians. Para el desarrollo de sus argumentos contra el acuerdo comercial, ver M. Hurtig, *The Betrayal of Canada*, Toronto: Stoddart, 1991 y M. Barlow, *Canada y con Bruce Campbell, Take Back the Nation*, Key Porter.

¹⁰ Los defensores del acuerdo bilateral subrayan que gracias al acuerdo la balanza comercial de Canadá con Estados Unidos se mantiene positiva. Esta afirmación es relativa, pues sólo toma en cuenta el comercio de mercancías y no los demás componentes de la balanza de cuenta corriente (principalmente servicios y ganancias de inversión). En 1992, la balanza de mercancías arrojó un saldo favorable a Canadá de diez [tij] 301 millones de dólares de Estados Unidos, la balanza de cuenta corriente mostró en cambio un saldo negativo para Canadá de cinco mil 816 millones de dólares. Datos de Estados Unidos, *Statistics Abstract 1993*, Washington: U.S. Department of Commerce-Bureau of the Census, 1993, p. 796.

¹¹ En una encuesta de agosto de 1993, 46 por ciento de los entrevistados canadienses expresaron su oposición al acuerdo bilateral, contra 41 por ciento que lo apoyaron. En cambio, 58 por ciento de los entrevistados se declararon en contra del acuerdo trilateral, sólo 29 por ciento lo apoyaron. Ver Hughes, *Canadians Unsupportive of Trade Policies* en *The Callup Pnl*, Toronto, 30 de agosto de 1993, p. 2.

¹² Otro elemento de peso es el fracaso de sus iniciativas constitucionales, que analizaremos más adelante.

¹³ Richard Simeon y Ian Robinson, *State, Society, and the Development of Canadian Federalism*, Toronto: University of Toronto Press, 1990, p. 309.

¹⁴ Ver Simeon y Robinson, *State, Society, and the Development of Canadian Federalism*, Toronto: University of Toronto Press, 1990, p. 309.

¹⁵ Ver Preston Manning, *The New Canada*, Toronto: Macmillan, Canadá, 1992, pp. 179-180 y *The Parliamentary Weekly*, Quarterly Report, vol. 2, N° 3, Ottawa, septiembre-noviembre de 1993, p. 26.

¹⁶ Ver Claude Morin, *L'art de l'impossible. La diplomatie québécoise depuis 1960*, Montreal: Boréal, 1987.

¹⁷ Gérald Bernier, *Industrial Development Policies in Québec, or the Quiet Revolution: An Empirical Assessment*, Université de Montréal-Université du Québec u Montréal, diciembre de 1992, Cahiers du GRÉTSF, N° 10, pp. 51-63.

¹⁸ El concepto fue introducido por Adolfo Aguilar Zinser en *Las organizaciones no gubernamentales en el proceso político y social de Canadá*, intervención en el seminario internacional *Canadá en transición*, CISAN, UNAM, noviembre de 1992.

¹⁹ Algunos grupos destacados que participan en la coalición son los siguientes: *Assembly of First Nations, Canadian Auto Workers, Canadian Federation of Students, Canadian Labour Congress, Centrale de l'enseignement du Québec, Confédération des Syndicats Nationaux, Council of Canadians, Ecumenical Coalition for Economic Justice, OXFAM Canada, Public Service Alliance of Canada*. Ver Tony Clarke, *Fighting Free Trade, Canadian Style en Crossing the Line: Canada and Free Trade with Mexico*, Vancouver: New Star, 1992, pp. 118-127. Clarke es el dirigente nacional de la coalición.

²⁰ Muchos quebequeses nacionalistas que se oponían al TLC eran sin embargo reticentes a apoyar una asociación que se declara "ProCanadá". El nuevo nombre de la coalición elimina esta ambigüedad.

²¹ El TLC tendrá también efectos sobre la política exterior de México, que pudieran llegar tan lejos como lo desearía el ex embajador de Estados Unidos en México John D. Negroponte: "An FTA would in itself be an acceleration of a North American orientation to Mexico (U.S. foreign relations)", como escribió en un memorándum confidencial hecho público por Proceso, N° 758. México, 13 de mayo de 1991. Baste por lo pronto asentar la idea, pues este ensayo se centra en los efectos de la liberalización comercial sobre la política interna.

²¹ En la Conferencia sobre Derechos Humanos reunida en Viena en junio de 1993, la entonces canciller Barbara McDougall expresó que la defensa de los derechos humanos por la comunidad internacional es un valor absoluto que no puede sujetarse a la voluntad soberana (de los Estados).

²³ André Quilley, Stewart Henderson y Daniel Livermore, *Sovereignty, Non-Interference and the International Order*. Ottawa: External Affairs and International Trade Canada, 1992 (Policy Planning Staff Paper, N° 92-2). André Quilley fue designado secretario de Estado para Asuntos Exteriores del nuevo gobierno liberal.

²⁴ La coincidencia hizo pensar a los analistas que México y Canadá harían frente común en la negociación. Ver S. López, *Respeto a la soberanía: Wilson en El Financiero*, México, 8 de abril de 1993 y Ian Austen, *Fight over Side Deals Lines Up Canada and Mexico against U.S.* en *The Spectator*, Hamilton, 22 de mayo de 1993. Finalmente, como sabemos, Canadá se mantuvo en su posición mientras que México cedió.

²⁵ Ver *The Heirs of Zapata*, en *The Globe and Mail*, Toronto, 5 de enero de 1994 y Lise Bissonnette, *Un déficit démocratique en Le Devoir*, Montreal, 7 de enero de 1994.

²⁶ Una dirigida por Gerald McKenzie, de la Liga de derechos y libertades, y otra por Ovide Mercredi, Gran Jefe de las Primeras Naciones de Canadá (confederación

pancanadicns de indígenas). Ver Sylvie Dugas y Philip McMaster, *Ovide Mercredi veut prumouvoir une organisation indienne transnationale en Lo pre.rse*, Montreal, 19 de enero de 1994.

²⁷ Tesis defendida por Víctor Flores Olca, *E1 TLC: hechos, oportunidades, dificultades en La Jornada*, 19 de novicmbre de 1993 y por Julián Castro Rea Canadá, *¿aliado o adversario?* en *Revista tne_eicatta de política exterior*, N° 38, México, primavera de 1993.

²⁸ Ver Willittm Mark Habeeb, *Pnmet' (ni<j Toctic.s in International Negociarintt.s: Hon Weak Nations Bar,r;ain with Strong Nations*, Baltirnore: The I Iopkins Univcrsity Press. 1988.

²⁹ Ver Joscph S. Nye y Robert O. Keohane, *Power and Interdependence*, Boston: Little, Brown, 1977.

³⁰ Ver Bertrand Marotte, *Canada, Mexico Must Unite to Tackle U.S. "Elephant"-Diplomat en The Daily Neu,s, Halifax*, 17 de abril de 1993. La oportunidad para hacerlo se presentó un mes más tarde, en ocasión de la mencionada oposición canadiense y mexicana a la aplicación de sanciones arancelarias a violaciones de los acuerdos ambientales. Pero por algún motivo la ocasión fue desaprovechada, y manteniéndose firme en su oposición Canadá logró lo que a México se le negó.

Investigador y Coordinador del Área de Canadá, Centro de Investigaciones sobre América del Norte, UNAM.